



Las nuevas experiencias organizativas de la agricultura familiar en los nudos de la política pública

FERNANDO GONZÁLEZ CANTERO, VALERIA ANA MOSCA,
JULIETA SAETTONE PASE Y PAULA ACERO LAGOMARSINO

Introducción

A partir del año 2004 en Argentina asistimos a un creciente proceso de institucionalización de la categoría de “agricultura familiar” (AF) en la política pública. Como parte del mismo, surgieron novedosas instituciones estatales, legislaciones y, a su vez, numerosas organizaciones.

Comprender esto como un proceso social más amplio que la instrumentación de políticas públicas, y en el que intervienen no sólo diferentes instituciones estatales (nacionales e internacionales) sino también múltiples actores sociales, permite visualizar las transformaciones que los mismos sujetos atraviesan. Es por ello que en este artículo nos proponemos analizar el surgimiento de lo que consideramos “nuevas experiencias organizativas” de la AF en el marco de los “nudos” de la política pública.

Partimos de una perspectiva teórica que plantea a la política como un conjunto de respuestas (por acción u omisión) que permiten interpretar la toma de posición del Estado respecto a una temática o problemática que genera la movilización de diversos actores de la sociedad (Ozslak y O'Donnell, 1995: 112). En ese sentido, consideramos que las organizaciones sociales mediante su accionar “coproducen” la política pública y desarrollan estrategias para resolver sus problemáticas cuando el Estado actúa por “omisión”.

Así, la política pública como un proceso desplegado en relación a una cuestión que la sociedad problematiza, puede ser observado también en torno a “nudos” mediante los cuales analizar ‘hacia atrás’ y ‘hacia adelante’ las reconfiguraciones, tanto de la cuestión como de los actores mismos. Analizar estos “nudos” es importante para comprender el surgimiento de nuevas experiencias organizativas con origen en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y que luego se extendieron a nivel nacional, especialmente a partir del 2015.

Con la llegada al gobierno de la alianza Cambiemos encabezada por Mauricio Macri (2015-2019) se redujeron organismos, presupuesto y programas dirigidos a la AF. Este proceso redefinió la relación entre la AF y el Estado, dando como resultado nuevas formas de acción colectiva, ampliando la representación a una diversidad de sujetos y demandas a lo largo del país. Ese es el caso de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural) –actualmente Federación Rural para la Producción y el Arraigo– estudiados en este trabajo, que surgen asociados al sujeto arrendatario y aparcero del cinturón hortícola platense en la RMBA

El período posterior, con el gobierno del Frente de Todos presidido por Alberto Fernández (2019-2023) pareció abrir un canal para los reclamos de la AF a partir de la recuperación de cierta institucionalidad y una mayor articulación política con las organizaciones. Además, con la llegada de la pandemia COVID-19 estos espacios obtuvieron gran visibilidad por su rol en la producción de alimentos y a partir de la revalorización que tomaron los mercados de cercanía y la venta de bolsones de verdura, producto del aislamiento preventivo.

Partiendo de esta periodización, nuestro objetivo se centra en analizar la emergencia de las nuevas experiencias organizativas de la AF en relación dialéctica con las políticas públicas implementadas para el sector entre el 2015 y el 2023. El análisis surge de debates y reflexiones que venimos desarrollando en el marco del Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IIGEO-FFyL-UBA), a partir de diferentes investigaciones de tipo cualitativo, basadas en estudios de caso en zonas rurales y periurbanas de la región pampeana y en fuentes primarias (observación y entrevistas a productores, funcionarios, dirigentes, técnicos) y secundarias (bibliográficas, periodísticas, documentos de

política pública o generados por las organizaciones, etc.)¹. De estos estudios, en este capítulo describiremos dos casos a modo ilustrativo.

El capítulo se organiza en una primera parte donde realizamos un recorrido por los principales nudos de la política pública. Luego describimos las principales características de estas nuevas experiencias organizativas para, finalmente, abordar los dos casos seleccionados. Por un lado, el caso de la organización La Comunitaria presente en 16 localidades de las provincias de Buenos Aires y La Pampa². Integrada a la Federación Rural en 2017, ilustra el proceso de nacionalización de estas nuevas experiencias organizativas. Por otro lado, el caso de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que a partir del 2015 adquiere mayor repercusión producto una forma de protesta novedosa: los verdurazos. Con gran incidencia en la RMBA, rápidamente se extendieron al resto del país y a otras organizaciones bajo distintas formas (tractorazos, feriazos, etc.) consolidándose como un método de protesta característico del sector.

Los nudos de la política pública y las organizaciones de la agricultura familiar

Como indicamos inicialmente, en este trabajo partimos de reconocer a la política pública en sentido amplio y como un proceso social. En efecto, siguiendo a Oszlak y O'Donnell (1995) la consideramos aquí como un conjunto de respuestas (por acción u omisión) que permiten interpretar la toma de posición del Estado respecto a una temática o problemática que genera la movilización de diversos actores de la sociedad civil. Retomando a estos autores se define como:

“un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del estado en relación con

¹ Saettone (2023), Acero Lagomarsino y Mosca (2023), Navós (2021), Mosca (2020), Mosca y González (2019), entre otros.

² Sansinena, América, González Moreno, Fortín Olavarria, Sundblad, Roosevelt, Mira Pampa, Ameghino, Trenque Lauquen, Cañuelas, Colonia Seré, Villa Sauze en Buenos Aires y en La Pampa General Pico, Santa Rosa y Anguil, Realicó y Santa Isabel.

una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión.” (Oszlak y O’Donnell, 1995:112–113)

Desde esta perspectiva, la política pública se constituye como una suma de acciones manifiestas o implícitas que permiten determinar la posición “predominante” del Estado en relación a una cuestión socialmente problematizada. El término “predominante” refiere a que la política pública suele ser un conjunto de iniciativas y respuestas, llevadas adelante por diversas instituciones estatales que, muchas veces, resultan contradictorias o conflictivas entre sí, lo cual da cuenta del carácter negociado, y abiertamente conflictivo que frecuentemente asumen las tomas de posición del Estado.

Asimismo, se desprende que la política pública puede abordarse como un proceso en el que participan actores estatales y no estatales . Oszlak y O’Donnell (1995: 104) plantean que el análisis de política pública desde esta perspectiva “permite una visión del estado ‘en acción’, desagregado y descongelado como estructura global y ‘puesto’ en un proceso social en el que se entrecruzan de forma compleja con otras fuerzas sociales”. Esta propuesta teórico-metodológica nos permite ordenar y considerar todos los actores intervinientes en un proceso social amplio.

Sin embargo, a los fines de este trabajo, nos interesa destacar que estos autores sostienen que la política pública puede advertirse como “nudo” dentro del proceso social ya que “(a) cuentan con el respaldo de normas de cumplimiento supuestamente obligatorio y de una última ratio fundada en el control de superiores medios de coacción física, y (b) [...] en general repercuten sobre la sociedad más extensamente que las políticas privadas” (Oszlak y O’Donnell, 1995: 16–17). Principalmente, se constituyen como “nudos” al influir en la definición, contenido y explicación de la posición y acción de otros actores. De acuerdo con estos mismos autores: “Esos nudos pueden resultar privilegiados puntos de observación de ciertos tramos del proceso social: ‘hacia atrás’, en la confluencia de políticas estatales y privadas que influyen en la aparición de cada nudo y ‘hacia adelante’, en las nuevas tomas de posición que a su vez contribuyen a generar y que significan desplazamientos hacia un próximo ‘nudo’” (1995: 17).

Al mismo tiempo, cada uno de estos “nudos” está compuesto por diversos acontecimientos y hechos de política pública, como ser: sanción de leyes, creación de instituciones, conflictos político-sociales y demás acciones. Este conjunto de hechos analizados en forma conjunta permiten identificar la toma de posición del Estado. Denominamos a estos acontecimientos como “hitos”, los cuales pueden tener diferente relevancia al interior de cada “nudo”.

Como sostenemos inicialmente, en este trabajo analizamos la emergencia de lo que consideramos “nuevas experiencias organizativas de la AF” mediante los “nudos” de la política pública. Al respecto es preciso realizar algunas consideraciones metodológicas en relación al recorte temporal de nuestro análisis.

En primer lugar ubicamos el surgimiento de estas nuevas experiencias organizativas a partir del año 2010. Sin embargo, es recién a partir del 2015, en el marco de una política regresiva para la AF, que las mismas toman visibilidad y exacerban su carácter novedoso. Por último, en nuestro repaso incorporamos un primer momento relacionado al nudo que explica el surgimiento mismo de la AF en Argentina como categoría política. Este primer nudo abarca un periodo de más largo alcance que el derivado del surgimiento de estas expresiones y se fundamenta en la necesidad de contextualizar el proceso mediante el cual la AF se impone como categoría política.

Habiendo expuesto nuestra perspectiva analítica y realizado las consideraciones metodológicas sobre el recorte temporal, buscamos reponer los “nudos” para analizar las reconfiguraciones de las organizaciones de la AF. Estos nudos son: (i) el surgimiento de la categoría AF en Argentina; (ii) la institucionalización de la AF y (iii) el cambio de abordaje sobre la AF (de concebirlas dentro de la política agraria a incorporarlas a las asistenciales); (iv) la apertura hacia las organizaciones de la AF tanto en la gestión como en reconocimiento de su representatividad sectorial..

El *primer nudo* que distinguimos en nuestro recorrido es el surgimiento mismo de la categoría de agricultura familiar (AF) en Argentina. Lo consideramos de esta forma ya que suele haber acuerdo en que se trató de un surgimiento “desde arriba”, al reconocerse su impulso desde diversas instituciones nacionales y regionales (Nogueira et. al, 2017). En efecto, la categoría de ‘agricultor familiar’ referida a un tipo

específico de sujeto social agrario se impuso recién en las últimas décadas en Argentina. A ella le anteceden intensos debates en los estudios sociales agrarios respecto a la definición del sujeto que se caracteriza por la relación entre el trabajo familiar y la tierra en pequeñas explotaciones de producción-consumo, que se remontan a obras famosas de autores como Alexander Chayanov. Así reconocemos las definiciones de campesino, pequeño productor, colono, chacarero, trabajador rural, minifundista, entre otras (Manzanal y González, 2010; Soverna et al., 2008). Ello da cuenta de que se trata de una noción que refiere a un actor reconocido históricamente.

En Argentina, su irrupción y utilización surge a partir de una serie de circunstancias y eventos regionales³. Como plantean Soverna et al. (2008: 1), “la instalación de la problemática de la agricultura familiar en el país llega de la mano del MERCOSUR” (p. 1). Para estos autores “la novedad no estaba representada por el uso del concepto [...] sino en que el mismo apareciera asociado a la necesidad de definir políticas”.

Un hito importante sucede a fines de 2004 con la creación de la Reunión Especializada de la AF (REAF) en el ámbito del MERCOSUR. Un segundo hecho de estas características, tiene lugar en 2005, por iniciativa de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: la participación en la REAF da lugar a la constitución del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF). Su creación fue validada con la participación de 100 organizaciones de todo el país. Del FoNAF también participaba un conjunto de organizaciones que formaban desde 2003 el Movimiento Nacional Campesino Indígena⁴.

³ Nogueira et al. (2017) identifican que a partir del año 2000 diversos organismos internacionales (Food Agricultural Organization –FAO–, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA–, Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola –IICA–, Banco Mundial) realizan una serie de estudios que ponen el eje en la pobreza rural y la seguridad alimentaria vinculada con las pequeñas explotaciones familiares.

⁴ Se trataba de una instancia dónde confluían organizaciones formadas al calor de las luchas campesinas e indígenas de las década de 1990 – el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE); Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST), Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Red Puna de Jujuy, entre otras – con organizaciones de la “vieja guardia” – como el

En definitiva, este primer nudo –el surgimiento de la AF como categoría aglutinante de un heterogéneo grupo de sujetos agrarios– fue conformando un entramado de organizaciones y espacios de articulación entre organizaciones con una vieja tradición y aquellas surgidas a partir de la crisis de 1980 y la reestructuración del Estado en el marco de un nuevo modelo agrario en la década de 1990. En un principio estos espacios de confluencia surgieron fuertemente condicionados y promocionados desde las instituciones estatales como da cuenta la experiencia FoNAF.

Un *segundo nudo* lo representa la institucionalización de dicho proceso. La misma comienza con el hito del “conflicto con el campo” en 2008 que supuso una férrea reacción y oposición por parte de sectores rurales medios y grandes –particularmente chacareros dedicados a la producción granaria para exportación– a las medidas impulsadas por el gobierno nacional que buscaban imponer un régimen de retenciones móviles a la exportación de soja. Se sostiene que fue a partir de allí cuando el Estado argentino reconoció a la agricultura familiar: “A causa de este conflicto y como una respuesta que podría interferir en la alianza de los grupos opositores, el Gobierno mostró un mayor interés en el sector de la AF, creando organismos estatales específicos y modificando la estructura institucional” (Manzanal y González, 2010: 14). Se trataba de una nueva coyuntura en la cual el Estado se encontraba abierto a internalizar demandas de la AF.

Este hito significó un punto de inflexión para el proceso de organización del sector, mientras que para el gobierno significó reorientar la relación con los sectores hegemónicos del campo, redireccionando a partir del 2008 una parte (pequeña) de su estrategia política con el campo al fortalecimiento e institucionalización de la AF. Desde la política pública se advierte un conjunto de hitos importantes como la creación del Monotributo Social Agropecuario en 2009 –acceso al sistema de seguridad social y obra social a miles de productores– (Marcos, 2021) y el mayor impulso dado al Registro Nacional de la Agricultura Familiar –creado en 2007 que buscaba cuantificar, caracterizar e identificar al sector.

Otro hito es el que marca la influencia en el sector de la AF por parte de organizaciones ligadas a la economía popular con la asignación en 2012 del dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, como Subsecretario de Agricultura Familiar. Con fuerte llegada a los movimientos que integraban la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Pérsico buscó combinar el acceso de dirigentes populares a las instituciones, con la acumulación de poder popular a través de la lucha reivindicativa en las calles, para así lograr la redistribución del ingreso y la riqueza (Navós, 2019)⁵. Fue durante el 2014 que se dio el punto más alto de institucionalización en este nudo con la jerarquización de la Secretaría de Agricultura Familiar –previamente Subsecretaría– y, a fines de 2014, con la sanción de la Ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y la creación del Consejo de Agricultura Familiar Campesino Indígena.

En definitiva, este segundo nudo reestructuró la alianza del gobierno con los sectores hegemónicos del campo redireccionando recursos a la consolidación del “otro campo” (Mosca y Orchani, 2021). La política pública hizo mayor foco en la AF aportando a fortalecerla en lo productivo y comercial, pero también incorporando una perspectiva integral que buscaba dar respuesta a problemáticas que afectan a las familias productoras –salud, vialidad, hábitat, entre otras–. Por último, cabe destacar que la política pública dirigida al sector tuvo un marcado aspecto organizacional que fomentaba el asociativismo y fortalecimiento de las organizaciones (Mosca y González, 2019).

El desarrollo de este nudo produjo una reconfiguración del sector. En primer lugar, el rol de la FAA –representante histórico de los pequeños productores– fue ejercido con muchas contradicciones ya que se posicionó a la par de las entidades rurales representantes de los grandes terratenientes (SRA, CARBAP, etc.). Eso le quitó legitimidad representativa para gran parte de la AF, en particular aquellos productores más pequeños. En segundo lugar, al tiempo que el gobierno nacional elaboró como estrategia la institucionalización de la AF, desde algunas organizaciones se comenzó a poner en cuestión la autonomía real del

⁵ Desde 2019 Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), reconocida actualmente como representante sindical de la economía popular.

FoNAF respecto al Estado⁶. Y es –no casualmente– en la nueva coyuntura inaugurada luego del conflicto con el campo que comienzan a surgir “nuevas experiencias organizativas” de la AF. Sin embargo, es recién unos años después cuando toman mayor fuerza y alcance.

Uno de los principales cambios que produjo el impulso por parte de políticas públicas diferenciadas para la AF fue la construcción misma de sujetos que pasaron a identificarse –de manera contradictoria, conflictiva y sin dejar de lado heterogeneidades– como productores o agricultores familiares. Esa identificación, puede adoptar diferentes características. En algunas ocasiones es más instrumental –para conseguir recursos–, y en otras es más identitaria y con clara vocación de construir dicho sujeto. Pero en ambos casos, ello derivó en un mayor nivel de aglutinamiento y organización del sector (Mosca y González, 2019).

Un *tercer nudo* que identificamos surge a fines de 2015 con el cambio de gobierno a nivel nacional y provincial. De acuerdo con Nogueira et al. (2017: 42) la llegada al gobierno de Mauricio Macri produce “efectos en los estilos de gestión a nivel global y en cuanto a la forma de comprender las problemáticas del desarrollo rural y la agricultura familiar” (Nogueira et al, 2017: 42). En este marco podemos destacar, a partir de la sanción de la Ley de Ministerios, la puesta en pie del Ministerio de Agroindustria que reemplazó al de Agricultura, Ganadería y Pesca (creado en 2009) marcando de este modo la promoción a las grandes producciones agropecuarias como factor de desarrollo. Estas definiciones explicitan un interés en dirigirse hacia los productores más capitalizados del sector. En cambio, para el sector de la AF se plantearon acciones promoviendo el desarrollo de capacidades individuales de innovación y “emprendedurismo” asociándola a los modelos empresariales de los que antes pretendía diferenciarse el sector (Latuada, Nogueira, Urcola, 2017; Maraschio, 2019; Urcola y Nogueira, 2023).

Este cambio de orientación se tradujo, en una importante reducción del personal de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), afectando a los actores territoriales de las políticas, eliminando y desfinanciando

⁶ Así lo sostenía, entre otras organizaciones, el MOCASE. Ver “Algunas verdades sobre el FoNAF” en su página web:

<https://www.mocase.org.ar/noticias/algunas-verdades-sobre-el-fonaf>

programas y áreas que trabajan con la AF⁷. Debilitada la estructura de la SAF, las políticas para la AF pasaron a concentrarse en las acciones del Ministerio de Desarrollo Social, en articulación con el INTA, a partir de ProHuerta (Mosca y González, 2019). Como señala García (2020), el ProHuerta tuvo continuidad e incluso un aumento de presupuesto en 2017, especialmente en el componente Programas Especiales. Aunque luego de la toma de deuda con el FMI también sufrió recortes.

En paralelo, y en particular a partir del 2016, se acrecienta el protagonismo de organizaciones de la AF a través de novedosas expresiones de acción colectiva. Los llamados ‘verdurazos’ supusieron la ocupación de espacios públicos en zonas céntricas de las principales ciudades del país para la entrega gratuita (o venta a bajos precios) de alimentos frescos producidos por este actor. A través de estas acciones se ofrece verdura de calidad a precios justos tanto para consumidores como para productores (Acero Lagomarsino y Mosca, 2023; Marcos y Nosedá, 2020; Mosca 2020). También con la organización de encuentros, foros y otros eventos donde las diferentes voces y demandas de la AF son puestas en valor por diferentes actores. Un ejemplo de ello fue el “Foro por un Programa Agrario Nacional y Soberano”, en el que se reunieron más de 4000 productores de todo el país en Mayo de 2019 (Pérez y Urcola, 2020; Mosca y González, 2019).

Las movilizaciones encabezadas por este actor, tuvieron como objetivo dar mayor visibilidad social a la AF enfatizando su rol en la producción de alimentos. También se buscaba poner de relieve la existencia del “otro campo” en contraposición a la idea de un sector homogéneo ligado a los productores de *commodities* (Marcos y Nosedá, 2020). Es a partir de ello que las organizaciones se han convertido en actores políticos relevantes poniéndose en el centro del debate sobre el alto costo de los alimentos.

Otro hito que creemos importante destacar fue la sanción de la Ley de Emergencia Social en diciembre de 2016 ya que supuso la creación del Salario Social Complementario (SSC) cuya gestión fue canalizada por organizaciones sociales, principalmente por la entonces CTEP. Esta conquista permitió a quienes desarrollan tareas en los amplios marcos

⁷ Para ver las transformaciones institucionales aludidas ver: Nogueira et. al (2017); Mosca y González (2019); Mosca (2020)

de la economía popular, ser reconocidos como trabajadores, dando pasos hacia la formalización de sus actividades y adicionar un aporte monetario a lo que obtienen de sus propias actividades como cooperativistas. Pero en lo que concierne a la consolidación de estos nuevos actores del sector, fue un elemento clave de su consolidación y crecimiento, ya que al ser canalizado por las organizaciones, estas lograron tener un mayor alcance, creciendo en número de productores organizados y en alcance territorial. A pesar de que se efectuaron una serie de transformaciones en detrimento de la AF, las relaciones de fuerza entre los actores que intervienen en las definiciones de política impidieron que se profundice el desmantelamiento de la institucionalidad.

En definitiva, este tercer nudo –relacionado con el cambio de orientación política del gobierno que inició a fines del 2015– llevó a la irrupción y consolidación de estas nuevas experiencias organizativas. La coyuntura adversa que amenazaba con desmantelar la institucionalidad ganada hasta 2015 potenció una mayor organización de los sujetos que se encontraban afectados por ello. Asimismo, en concordancia con Lattuada, Nogueira y Urcola (2017, p. 19) podemos decir que el lugar otorgado a la AF plantean un estado de institucionalidad aparente y de progresivo vaciamiento de las acciones emprendidas para la AF durante años anteriores, que no tuvieron como objetivo la eliminación del sector sino su redefinición en función de un nuevo proyecto político e institucional del gobierno.

Un *cuarto nudo* lo identificamos con la llegada al gobierno nacional del Frente de Todos en 2019 ya que implicó un cambio en las estrategias de las organizaciones de la AF. El nuevo gobierno pareció abrir un canal para los reclamos crecientes de las organizaciones que se plasmaron en los documentos que surgieron del “Foro por un Programa Agrario Nacional y Soberano” en 2019. En línea con ello, la nueva gestión planteó a la problemática del hambre como eje central de su plataforma política ubicando a la AF y su rol en la producción de alimentos, en un lugar prioritario desde las políticas públicas (al menos discursivamente) (Manzanal, 2021). Las organizaciones participaron de diferentes áreas del gobierno nacional y provincial, lo cual facilitó la materializa-

ción de importantes políticas de infraestructura productiva y de comercialización⁸.

A su vez, las organizaciones cobraron una gran centralidad en el marco de la crisis surgida por la pandemia de COVID-19 quedando expuesto su rol clave en el abastecimiento de alimentos sanos y a precio accesible. En ese sentido se destacaron las diversas modalidades de comercialización alternativas desplegadas.

La ocupación de los espacios institucionales fue el mayor hito de esta etapa que se vio atravesada por dos eventos que afectaron la gestión de gobierno: la pandemia por COVID-19 mencionada anteriormente y la crisis económica derivada de la deuda con el FMI. Al respecto Urcola y Nogueira (2023) sostienen que “las acciones de gestión en favor de la AF no han logrado recuperar la agenda de promoción antes iniciada, con intentos tímidos o fallidos de incorporación de los temas problematizados en el marco del Foro o promovidos desde la Ley de AF”.

Consideramos que este proceso y sus cuatro nudos generaron cambios en la relación del Estado con las organizaciones de la AF, tanto en las que surgen a la luz de estos nudos, como en algunas que existían previamente y modifican sus visiones, sus prácticas y las formas de producir territorio y política. Veremos ahora algunos ejes que creemos que son importantes en estos cambios y nos permite hablar de “nuevas experiencias organizativas de la AF”, que luego ilustraremos a partir de los estudios de caso de la UTT y La Comunitaria-Federación Rural.

Las características de las nuevas experiencias organizativas de la agricultura familiar

Hemos visto hasta aquí, los diferentes nudos que fueron impulsando las transformaciones en la política hacia la AF y modificando las características de los sujetos intervinientes en la política pública. Creemos

⁸ Los casos más notorios fueron los referentes del Frente Agrario Evita-Movimiento Nacional Campesino Indígena; Movimiento de Trabajadores Excluidos - Rama Rural y Federación Nacional Campesina en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena y un referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra en el Mercado Central de Buenos Aires.

que en ese proceso se afianzaron ciertos aspectos en las organizaciones que nacieron en los últimos 15 años que nos permiten referir a su carácter novedoso.

Si bien en este trabajo buscamos hacer el ejercicio de caracterizar a este nuevo tipo de experiencias, también advertimos que existen continuidades con aquellas tradicionales nacidas en etapas previas. Estas continuidades nutren el accionar de las más recientes al calor de sus memorias organizativas y sus reivindicaciones. Por lo tanto, no se trata aquí de una delimitación tajante entre “nuevas” y “tradicionales”, sino más bien de una –por denominarlo de alguna manera– fase de transición/transformación de las experiencias organizativas de la AF⁹.

A continuación reconocemos cuatro aspectos que las caracterizan:

1. Su origen en los bordes del movimiento piquetero y su anclaje en la tradición de la economía popular.

Una primera característica es que estas experiencias no provienen de luchas estrictamente del sector agrario. Tienen su origen en organizaciones ligadas al movimiento piquetero que surgieron en torno a la crisis del 2001 y que se fueron transformando, así como su participación en federaciones más amplias (ligadas a la economía popular).

En el caso de la UTT, los primeros núcleos militantes pertenecían al Frente Popular Darío Santillán (FPDS), quienes desplegaron una estrategia de organizar familias de productores en el Parque Pereyra Iraola (La Plata), luego en San Vicente y luego Luján (cuando ya era una organización independiente al FPDS)¹⁰. Desde su conformación como

⁹ Para precisar sobre experiencias organizativas previas en diversos momentos históricos de Argentina se recomienda revisar: Teubal, Palmisano y Petz (2019); Hocsman (2015); Lattuada, Nogueira y Urcola (2015); Barsky y Gelman (2011); Cittadini et al (2010); Giarraca (2003); Giarraca et al. (2001); Grela (1997) entre otros.

¹⁰ Asimismo, podemos mencionar a la Federación Nacional Campesina (FNC) que también se conforma como una estrategia de una organización piquetera en el sector agrario, en este caso de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el año 2010. Dentro de la FNC se organiza la Asociación de Medieros y Afines

organización de pequeños productores desarrolló vínculos con distintas organizaciones de trabajadores, llegando a integrarse a la CTEP con el objetivo de otorgarle una impronta gremial a la organización e incluso gestionando la Secretaría de Producción y Comercialización de la CTEP.

La historia de la actual Federación Rural para la Producción y el Arraigo (FR) por su parte, también está ligada a estrategias de militantes provenientes del FPDS. En este caso de técnicos agrónomos, que desarrollaban tareas en el cinturón hortícola, e impulsaron la creación del Movimiento de Pequeños Productores (MPP) de La Plata en 2015. Se incorpora al MTE hasta el 2022 cuando se autonomiza como FR como un salto estratégico y una expansión en la organización del sector, participando ambas dentro de la UTEP¹¹.

Por último, esta trayectoria les abre la puerta a la participación en la gestión del “Salario Social Complementario” como parte de la actual UTEP. Ello permitió: (i) masificar las organizaciones, dado que para ser beneficiario del salario era necesario formar parte de cooperativas del sector; (ii) dotar de recursos a las mismas y (iii) expandirse a nivel nacional.

2. Cambios en el repertorio de acción colectiva, donde cobran importancia las disputas por el territorio y la acción directa (comedores, bachilleratos populares, cortes de ruta, verdurazos, etc.).

El origen y la pertenencia de algunas de estas organizaciones al mundo de la economía popular generan ciertos cambios en las acciones que llevan adelante para conseguir sus reivindicaciones. Muchas de estas acciones están emparentadas con la tradición de los movimientos piqueteros, típicamente urbanos, y otras vinculadas a estrategias propias que buscan ganar el apoyo de la población urbana.

(AsoMA) una de las primeras experiencias organizativas en el periurbano platense que se remonta a la década de 1980.

¹¹ Si bien en este trabajo no nos centramos en la Federación Nacional Campesina (FNC), nos parece que junto a otras (como el Frente Agrario Evita o las diversas expresiones del MNCI) comparten características de estas “nuevas experiencias”, principalmente por su ligazón a la economía popular.

Podemos pensar a estas acciones en la línea de lo planteado por Omar Tobio, quien retomando a Charles Tilly las divide en contenciosas y no contenciosas. Las primeras son aquellas que plantean amenazas a la distribución existente de poder, y frecuentemente incita a la vigilancia, la intervención y/o represión por parte de la autoridad política” (Tilly; 2000: 11 en Tobio, 2017). Las segundas son aquellas que “dejan marcas en la tierra por parte de quienes habitan el lugar (una profundización de la acción cooperativa, no litigiosa, en el barrio, creando bloqueras, comedores, huertas)” (Tobio, 2017: 7). Son las propias organizaciones las que “realizan una inversión en el campo de los derechos e instituyen, por lo tanto, una nueva territorialidad en la medida que se van desarrollando modalidades propias de habitar” (Ibíd.).

Entre las acciones contenciosas, las organizaciones han recurrido a la ocupación del espacio público de maneras novedosas, como son los verdurazos en las grandes ciudades, los tractorazos en los que se regala la producción y cortes de ruta más tradicionales. Entre las no contenciosas, podemos nombrar acciones tendientes a reforzar la territorialidad de la AF. En este sentido, diferentes organizaciones llevan adelante comedores, escuelas autogestivas para los miembros de la organización, infraestructura para la producción comunitaria (galpones de acopio, fábricas de bioinsumos, salas de agregado de valor, colonias agroecológicas, entre otras).

3. Una mirada más integral que rompe con la dicotomía ciudad-campo, trabajador-campesino.

Otro cambio que consideramos importante en su repertorio de acciones es la ruptura con la posición dicotómica entre lo urbano y lo rural o entre la ciudad y el campo, y que, en términos del sujeto, se expresa en el abandono de cierta visión diferencial entre trabajador y campesino. En las nuevas experiencias no sólo se agrupan campesinos (con y/o sin tierra), sino que forman parte de ellas también los arrendatarios junto a los trabajadores agrarios (es el caso de la horticultura, por ejemplo).

Dependiendo de la estrategia de cada una de las organizaciones también buscan agrupar diferentes sujetos dentro del amplio espectro de la AF (chacareros, colonos, pescadores, etc.), y establecer vínculos con trabajadores de la ciudad como se ejemplifica en las alianzas realiza-

das. En un primer momento, estas organizaciones forman parte de otros espacios donde comparten rumbos con los sectores excluidos de las grandes ciudades (MPP en el MTE, UTT en el FPDS).

Luego, a medida que ganan autonomía como sector específico, llevan adelante acciones (no contenciosas) en las ciudades como desarrollar espacios alternativos de comercialización (mayoristas, minoristas), nodos de redes de consumidores que apoyan y sostienen la producción agroecológica. A su vez, estas acciones permiten vincular a la población urbana con “el campo” a través de visitas a las quintas y diferentes lugares de producción de alimentos. De este modo, las estrategias organizativas permiten obtener un lugar destacado de cara a la sociedad, poniendo cara a quienes producen los alimentos ante la vida cotidiana de las ciudades, generando una interfase rural-urbana también en lo social y lo político (Marcos y Nosedá, 2020).

4. Un cambio en la estrategia reivindicativa que pasa a ser más de tipo sindical.

La integración de “nuevas experiencias organizativas” a espacios más amplios (mesas nacionales, federaciones) busca desplazar la mirada de estos sectores como meros sujetos de asistencia. En el caso de la UTEP agrupa actividades económicas realizadas por sectores populares, bajo formas no asalariadas, vinculadas a la subsistencia y carentes de derechos laborales básicos (Tófolli, 2021). Busca conseguir la personería gremial que fue otorgada a fines de 2015 como personería social, a la vez que solicita ser incorporada como parte de la CGT.

Dentro de ese espacio, la “Rama Agraria” transforma su accionar llevando a organizaciones de la AF a participar de agendas reivindicativas más generales, saliendo de los marcos de las demandas agraristas clásicas. De esta manera, se busca participar de las conquistas generales de la clase trabajadora, como ser: i) el acceso a la seguridad social por medio de herramientas como el Monotributo Social Agropecuario, ii) el acceso a la salud por medio de las obras sociales y iii) la participación en instancias de reivindicación salarial como el Consejo del Salario, que rige el aumento del salario mínimo vital y móvil, del que depende el monto del (ex) salario social complementario (Plan Potenciar Trabajo 2019-2023).

En el caso de la UTT, si bien comparte la mirada sobre el rol gremial de la AF organizada, no integra la Rama Agraria de la UTEP, aunque como mencionamos tuvo una experiencia inicial en lo que era la CTEP. En efecto, la UTT actualmente participa de la “Mesa Agroalimentaria Argentina”, un espacio estrictamente sectorial que se propone articular las organizaciones de lo que denominan “el otro campo”, conformada por una escisión del MNCI –el MNCI “Somos Tierra”–, la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) –que expresa una línea interna dentro de la FAA y agrupa a cooperativas de base–. De acuerdo con Mosca y Orchani (2021) “la apuesta de disputar el reagrupamiento del “otro campo” es llamativa y también se puede leer como una propuesta de iluminar las estrategias de las organizaciones que forman parte de la UTEP, un espacio con mayor impronta de organizaciones urbanas, repertorios de acción e identitarios propios y, en parte, distintos a los de las organizaciones campesinas o rurales”.

Las nuevas experiencias organizativas en los territorios

Habiendo presentado los nudos de la política pública y de las organizaciones de la AF, y las características que asumen en el período 2015-2023, a continuación presentamos dos casos de estudio ilustrativos que seleccionamos ya que: (i) aportan información actualizada, se trata de investigaciones en curso; (ii) implican distintos recortes espaciales; (iii) refieren a organizaciones diferentes. Por un lado, la Comunitaria como parte de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, en 16 localidades de las provincias de Bs.As y La Pampa, y por otro lado, el caso de la Unión de Trabajadores de la tierra (UTT) en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

La Comunitaria - Federación Rural para la Producción y el Arraigo

La Federación Rural para la Producción y el Trabajo es una organización que nació en 2014 en La Plata, Región Metropolitana de Buenos Aires, con el nombre de Movimiento de Pequeños Productores (MPP) organizando horticultores arrendatarios. Al poco tiempo de su conformación se integró al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) como su rama rural y se expandió a nivel nacional integrando otros sujetos, demandas y grupos, algunos con trayectorias previas como es

el caso de La Comunitaria. Como parte del MTE, primero integró la CTEP y luego la UTEP, de la cual continuó siendo parte después de su autonomización en 2022 como Federación Rural.

En 2023, la Federación Rural se distribuye en 20 de las 23 provincias argentinas, nucleando alrededor de 30 mil familias agricultoras, campesinas e indígenas que realizan trabajo cooperativo en producción, acopio, empaque, valor agregado, distribución y comercialización. Dentro de esta, La Comunitaria nuclea alrededor de 2 mil personas en 16 localidades del noroeste de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

La base social de La Comunitaria es heterogénea en cuanto a edad, género (mujeres, varones, LGBTIQ+), clase-fracción, actividad económica, grados de escolaridad y motivos que les llevan a integrarse a la organización. Incluye desde niños y estudiantes hasta adultos mayores; pequeños y medianos productores agrícolas-ganaderos (desde 10 hasta más de 250 has), contratistas, tamberos, familias productoras de cerdos, ovejas y aves, apicultores, productores de chacinados y mermeladas, crianceros en el oeste pampeano, trabajadores rurales; profesionales, trabajadores de la cultura, docentes, trabajadores municipales, mujeres que trabajan en tareas de cuidado en sus casas y/o para terceros en estancias.

En palabras de la organización, La Comunitaria “trabaja por el desarrollo de la cultura de los pueblos y parajes, por el arraigo y por el desarrollo de las pequeñas localidades (...) poniendo en el centro la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los compañeros y compañeras”, partiendo de la idea de que “la comunidad organizada tiene un conocimiento valioso y mucha experiencia en resolver los problemas” y es necesario “recuperar ese saber y transformarlo en política pública” (La Comunitaria, 3 julio 2021).

Sus demandas en este período incluyeron el acceso a tierra, insumos (como el maíz que aumentó fuertemente), maquinaria e infraestructura para la producción y la comercialización, políticas de apoyo en el marco de las inundaciones (2016–2017) y sequías (2022). Pero también se vincularon con la falta de empleo generada por los cambios del modelo productivo, el acceso a cultura, vivienda, agua potable, energía, transporte y caminos, cajeros, conectividad y el derecho a la educación en todos sus niveles para la población rural.

La particularidad de La Comunitaria es que surgió como grupo de teatro, en 2006 en Sansinena (partido de Rivadavia, al noroeste de Bs. As), en el contexto de recuperación de las extensas inundaciones de 2001 y el boom sojero. En aquel momento, la práctica teatral contribuyó a procesar la necesidad de catarsis, contención afectiva y sociabilidad generada por la inundación que dejó poblaciones aisladas y víctimas mortales (Fernández, 2015). Desde 2008, se fue extendiendo a las localidades de González Moreno, Fortín Olavarría, América, Roosevelt, San Mauricio, conformando el Teatro Comunitario de Rivadavia en 2010, cuyo desempeño en el teatro comunitario local, nacional e internacional otorgó una importante legitimidad social y política.

Desde 2011, a partir de la preocupación por el desempleo (identificada a través de la práctica teatral) La Comunitaria incorporó talleres de formación y trabajo en oficios. En 2013, se extendió a la provincia de La Pampa con la creación de un nuevo grupo en General Pico. Y en 2014 comenzó a desarrollar iniciativas vinculadas a DD.HH (como la conformación de la primera comisión de DD.HH del partido). La integración a la Federación Rural fue recién en 2017, en el contexto de medidas económicas regresivas del gobierno presidido por Mauricio Macrí y otra gran inundación, cuando empieza a impulsar proyectos socio-comunitarios y agrarios y se extiende a las localidades de Santa Rosa, Santa Isabel, Victorica, Realicó en la provincia de La Pampa), Sundblad y más tarde Cañuelas en la provincia de Bs. As (La Comunitaria. 22 septiembre 2017).

Durante la etapa del gobierno marista, desde La Comunitaria se acompañaron distintas instancias de movilización viajando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para participar de los *verdurazos* como parte de la Federación Rural, que más tarde en su zona reprodujeron en forma de ferias de solidarias y de la cultura con modalidades menos contenciosas. Además, desplegaron iniciativas para paliar los impactos de las medidas económicas, como el mejoramiento de las infraestructuras para la realización de trabajos en oficios (textil, cocina, etc.), el acompañamiento mujeres y niñas en situación de emergencia habitacional, la refacción de viviendas de jubilados de la mínima, un espacio de acompañamiento a jóvenes en situación de consumo problemático, se empezó a ofrecer merienda acompañada de apoyo escolar y deporte o cultura en localidades como América y González Moreno (Bs. As) y Santa Rosa (La Pampa).

Al final de este período de gobierno, La Comunitaria realizó el primer proyecto agrario “más ambicioso” con apoyo de la política Proyectos Especiales-ProHuerta (que como mencionamos previamente fue una excepción a los recortes). El proyecto consistió en un engorde a corral comunitarias en tierras que prestó uno de sus miembros, con la participación de 8–10 productores de menos de 80 ha y que pastan banquinas, de las localidades de González Moreno, Sundblad, América, Sansinena y Fortín Olavarría. Los siguientes proyectos agroproductivos compartirán esta característica de colectivización de infraestructura y construcción de escala entre agricultores familiares de diferentes localidades.

En el marco del gobierno de Alberto Fernández y la pandemia se inauguraron nuevos grupos en las localidades bonaerenses de Villa Sauze (del partido de General Villegas), Colonia Seré (Carlos Tejedor) y Ameghino (partido homónimo). Durante la pandemia, La Comunitaria adaptó sus prácticas para dar respuesta a la crisis sanitaria, social, económica y la restricción a la circulación. En lo cultural, el teatro y los encuentros tomaron formatos virtuales. Entre las iniciativas socio-comunitarias repartieron viandas (a domicilio en casos de aislamiento), papas, barbijos producidos por el textil (para prevenir los contagios), abrigos para bebés producidos por el grupo de tejido, apoyo escolar. En lo productivo, por ejemplo, instalaron huertas agroecológicas en diferentes localidades de Buenos Aires y La Pampa generando un ingreso para los participantes (a través de la gestión del Salario Social Complementario/Potenciar Trabajo) y verduras a precios justos para los consumidores.

Ante la falta de respuesta del gobierno de La Pampa, gestionaron una compra de maíz colectiva entre pampa húmeda y pampa seca para los crianceros. Algunos miembros viajaron al sur cebollero de Buenos Aires para compartir conocimientos de herrería con productores ceboleros del movimiento nacional para la construcción de un galpón de empaque, fortaleciendo las relaciones de solidaridad en este contexto. Mediante la iniciativa “leña social” distribuyeron leña a las familias que necesitan calefacción, proveniente de los árboles caídos de la Forestación Agroecológica que venían desarrollando junto a la cooperativa eléctrica CORPICO. Todas estas iniciativas permitieron el sostenimiento de la organización, en un contexto de restricción de actividades

que llevó a reconfigurar sus prácticas, a la vez que permitió fortalecerla como actor político a nivel local.

La Federación Rural y La Comunitaria participaron de diferentes áreas del gobierno nacional y provinciales, lo cual facilitó la materialización de importantes políticas asociadas a servicios, producción, agroindustria y transporte que se concretaron mayormente hacia 2022 una vez superada la pandemia. En este sentido, se destaca la construcción de una planta láctea en General Pico, una de alimentos balanceados para los crianceros en Santa Isabel, un camión con acoplado, una camioneta con carro desmontable y otro refrigerante, un molino de harina en González Moreno, la refacción de escuelas y la entrega de tablets e instalación de termotanques solares, entre otras iniciativas con apoyo de políticas públicas. Por otro lado, La Comunitaria creó un Bachillerato Popular.

Sin embargo, estas políticas no se dieron sin tensiones, ante las omisiones, dilaciones, apoyo al agronegocio (con políticas como el “dólar agro”¹² con perjuicios indirectos en la agricultura familiar) y fundamentalmente, la falta de respuesta sobre desigualdades estructurales como el acceso a tierra (no se reglamentaron los artículos referidos a esta cuestión de la Ley de AF) y el comercio internacional (se dio marcha atrás con el intento de expropiación de una importante empresa exportadora, Vicentín, endeudada con el Estado y productores).

Es de destacar que más allá de los *verdurazos* en CABA y momentos particulares como las inundaciones cuando son frecuentes y socialmente aceptadas acciones contenciosas (como cortes de rutas y manifestaciones frente a oficinas públicas) las principales acciones de La Comunitaria son de tipo no contenciosas. La diversidad de sujetos e iniciativas no contenciosas ayudan a La Comunitaria a disputar poder en un territorio como el pampeano, marcado por la invisibilización de la agricultura familiar, un fuerte control social y consenso político sobre el modelo del agronegocio.

¹² El dólar agro fue una medida transitoria que permitió a los exportadores de soja y derivados liquidar el 75% de sus ventas al valor del dólar mayorista y el 25% mediante vías alternativas, que en las siguientes ediciones se extendió a otros productos. Presionando sobre el precio del forraje.

Particularmente, se destaca del caso de la práctica teatral como una herramienta potente de organización, que permite la identificación, la construcción de estima, identidad y sentido de pertenencia de quienes participan, así como la discusión y reelaboración de las problemáticas que atraviesan en el territorio, recuperando memorias silenciadas y cuestionando el orden dominante (Saettone, 2023). En síntesis, si bien el origen de La Comunitaria no es el mismo que las organizaciones que fundaron la Federación Rural, comparte con ésta las características de las nuevas experiencias organizativas del sector (la mirada más integral del sujeto, el quiebre de la dicotomía ciudad-campo y trabajador-campesino, la realización de *verdurazos*, la estrategia sindical) con particularidades acordes a las relaciones en las cuales emerge y su trayectoria previa.

La Unión de Trabajadores de la Tierra

La UTT es una organización que nació en 2010 en la zona sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires como una cooperativa productiva planteando como objetivos la comercialización propia, el acceso a la tierra y la producción agroecológica. Desde su conformación como organización de pequeños productores desarrolló vínculos con distintas organizaciones de trabajadores informales. Inicialmente tuvieron un recorrido en la CTEP y luego siguieron su experiencia en la construcción de un espacio propio de carácter político-gremial que busca dar una respuesta integral a las problemáticas de los pequeños productores.

Actualmente se distribuye en 20 provincias del país, aunque su presencia mayoritaria es en la RMBA donde se destacan las producciones primario-intensivas, particularmente en el cinturón hortícola platense que provee de alimentos frescos a la CABA. Nuclea a más de 22 mil familias dedicadas a la producción de frutas y verduras, granos, lácteos, crianza de animales y pequeñas agroindustrias y se constituye como una de las organizaciones más influyentes de pequeños productores a nivel nacional.

Si bien comparte características genéricas con organizaciones de la economía popular vinculadas a la UTEP –como la lucha los derechos laborales y sociales, el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y el comercio justo– a lo largo de su trayectoria la UTT se ha distinguido

fundamentalmente a partir de la construcción de su identidad colectiva como trabajadores de la tierra y la instalación del “verdurazo” como método de protesta.

De acuerdo a las entrevistas y el análisis de la información secundaria, la autodenominación de Trabajadores de la Tierra se explica en reconocerse en la identidad, historicidad y organización de los pequeños productores como agentes de transformación social frente a “las injusticias del sistema agroalimentario”, a la vez que diferenciarse de “los grandes grupos económicos” que concentran la tierra y los mercados. Los productores se muestran como “el otro campo”, construyendo una otredad necesaria ya que el campo argentino parecería representar únicamente a la imagen próspera de los productores pampeanos exportadores de *commodities* (Marcos y Nosedá, 2020).

En este sentido los productores de la organización comparten valoraciones y formas de intervenir la realidad desarrollando acciones en defensa de un modo de vida que implica la lucha por el acceso a la tierra, la preservación de sus prácticas culturales y de sus formas de apropiación del territorio, reforzando en ese proceso su identidad colectiva como trabajadores de la tierra.

Como organización gremial y social desarrollan un extenso trabajo político y territorial cuyos ejes principales son) la producción agroecológica, ii) el acceso a la tierra; iii) la comercialización propia; vi) la cuestión de género. Estos ejes definen su estructura organizativa, la cual se rige a partir del funcionamiento de secretarías temáticas y se sostienen en una territorialidad que se practica y expresa de distintas maneras. Por un lado, en la apropiación de los productores –en términos materiales y simbólicos– del espacio de vivencia cotidiana y producción, a partir de acciones que desarrollan como respuesta a las necesidades y problemáticas de las familias productoras. Asimismo, a través de acciones de protesta que llevan a cabo como estrategia colectiva para visibilizar y obtener respuesta a sus reclamos, entre ellas el *verdurazo*.

Al igual que en el caso de La Comunitaria desarrollado anteriormente, esta doble condición de su territorialidad, contenciosa y no contenciosa, las emparenta con las organizaciones del movimiento piquetero, las cuales articulan la militancia del espacio cotidiano local (el barrio) con las prácticas de resistencia de acción directa como los cortes de ruta

(Tobío, 2014). Una combinación que, además, afianza su identidad como piqueteros y construye legitimidad política al interior de la organización y frente a todo al sector de la AF.

En el caso de la UTT, creció exponencialmente en el marco de la retracción en las políticas para la AF durante el macrismo, a la que hemos referido previamente. A partir de la territorialización de sus acciones en esta etapa, muchas vinculadas a su nexo directo con la Ciudad de Buenos Aires (epicentro del poder político), ganó un lugar importante en la escena política nacional, marcando agenda y colocándose como actor político destacado y referente de la AF organizada. En este marco el verdurazo se destaca como una estrategia clave de la organización, que consistió en una intervención en el espacio público no tan convencional con el objetivo de influir en la política pública y otorgó visibilidad mediática a la UTT como organización de la AF periurbana, instalándose de lleno en los medios de comunicación masiva. Fue impulsado primeramente desde los productores de la RMBA en CABA y luego se extendió a distintos puntos del país, ocupando lugares estratégicos de las ciudades con ferias de alimentos a precios accesibles. A su vez permitió otorgar un lugar relevante de cara a la sociedad poniendo cara a quienes producen los alimentos y acercando sus problemáticas, y una autoridad política entre otras organizaciones del sector que se vieron referenciadas en esta medida para vehicular sus reclamos y la replicaron, consolidándose como un método característico de protesta.

Similar al movimiento piquetero, el verdurazo resulta una continuidad en la protesta en el espacio público pero la novedad reside en la forma (donación/ venta de verduras en espacio público) y en los sujetos que emprenden esta acción de protesta (AF, pequeños productores). Cobró un sentido que los diferenció de las protestas más comunes de otros sectores populares (cortes de ruta o calle, movilizaciones) y de las entidades más corporativas del agro. En ese sentido, ilustra al espacio público como escenario de confrontación e interacción entre quienes dominan y resisten, y como condicionante de la protesta social.

Por otra parte, como prácticas de carácter no contencioso que desenvuelve la UTT en la RMBA podemos mencionar entre las más destacadas: (i) el desarrollo de Colonias Agroecológicas de Abastecimiento

Urbano¹³; (ii) la construcción de una red alternativa de comercialización de alimentos¹⁴; y (iii) acciones con perspectiva de género¹⁵.

Las prácticas que desarrolla la organización en la RMBA para alcanzar los objetivos que persigue como organización social y gremial están directamente ligadas a la etapa política o el contexto institucional. Con la victoria electoral de la alianza del Frente de Todos y la asunción de Alberto Fernández como presidente del gobierno a finales del 2019 se observan algunas modificaciones en el repertorio de acciones de la UTT respecto al período anterior, basadas en un mayor grado de apertura al acceso institucional para las organizaciones y movimientos sociales. Tanto es así que la UTT tuvo la propuesta de gestionar la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, el centro de comercialización de frutas y hortalizas más grande del país que abastece a la CABA y al GBA. Allí desarrollaron un trabajo que implicó acuerdos con los operadores para generar precios accesibles, articulación con organismos estatales, universidades y comunidades vulnerables para garantizar abastecimiento a distintos sectores sociales.

¹³ Se plantea como un proyecto integral que abarca no solo la creación de espacios para la producción sino también vivienda, recreativos, educativos y comerciales, resolviendo el problema del acceso a la tierra que es uno de los elementos más significativos de la exclusión del sector. En esta línea crearon el Consultorio Técnico Popular (CoTePo) que, entre otras cosas, lleva a cabo la elaboración y provisión de bioinsumos. Junto a esto, la certificación agroecológica para sus cultivos a través del Sistema Participativo de Garantías (SPG).

¹⁴ Con cadenas de suministro y distribución de alimentos más eficientes y sostenibles (alcanzando 380 puntos de venta directa) mediante: mercados minoristas y mayoristas; nodos comunitarios y almacenes soberanos de venta de bolsones de frutas, verduras y productos regionales; participación de los productores en ferias locales; distribución a cooperativas y acuerdos de venta a agentes públicos y privados; venta en acciones de protesta como los verdurazos.

¹⁵ Para educar y concientizar los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres productoras a distinta escala, así como visibilizar el rol de las productoras ante la sociedad. En este sentido han formado una red estable en todo el país con promotoras que realizan talleres de género en la organización y encuentros de productoras, verdurazos feministas y acciones públicas, emprendimientos productivos con el objetivo de alcanzar la independencia económica y crearon un refugio para mujeres en situaciones de violencia.

Producto de la pandemia, al igual que el resto de las organizaciones de la AF, la UTT alcanzó mayor visibilidad a partir de la revalorización que tomaron los mercados de cercanía y la venta de bolsones de verdura. Los productores buscaron la manera de hacer frente a la crisis sanitaria que modificó varias de sus alternativas de venta, con restricciones de circulación en la vía pública y la suspensión de las ferias en algunos municipios, que las catalogan como espacios culturales y no alimentarios (Vietri, Vitale, Quinteros, 2020). Desde la UTT, por un lado, intentaron canalizar por vías institucionales parte de sus reclamos, como mejoras de infraestructura y equipamiento, provisión de insumos de higiene para llevar a cabo un protocolo sanitario, ayuda económica para los pequeños productores. Paralelamente, mediante su infraestructura organizativa, el afianzamiento de las relaciones de comunidad de la organización y de su trabajo territorial se hicieron cargo del mantenimiento de la actividad ante la insuficiencia en la asistencia del Estado.

Durante toda esta etapa la UTT se fue afianzando como referente de la AF periurbana y profundizó su construcción gremial a través de una estrategia política de trabajo territorial y multisectorial. En ello se inscribe la puesta en marcha de la Mesa Agroalimentaria, lanzada en 2021 en conjunto con el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI ST) y la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFÉ). Bajo el lema “El campo que alimenta y construye Soberanía Alimentaria” se plantea como un espacio amplio que nuclea a una gran diversidad agraria, con el foco puesto en la urgencia de dar respuesta a la crisis alimentaria en el país y con el horizonte de construir un modelo agrario alternativo.

En resumen, mediante un repertorio variado de acciones que incluye la militancia territorial local y el desarrollo de formas alternativas de comercialización, tácticas confrontativas y de articulación política, la UTT ha logrado construir una alianza “urbano-rural”, instalando sus problemáticas, destacando sus estrategias productivas y culturales y reivindicando a la agroecología como modelo alternativo de producción de alimentos. De este modo, entendemos que la identidad política de la UTT se construyó a partir del despliegue de una territorialidad que abarca distintas prácticas que se relacionan directamente con los contextos institucionales y la han posicionado en un lugar determinan-

te entre las organizaciones de la AF periurbana, así como ante la sociedad y el Estado.

Conclusiones

En este trabajo buscamos delinear y caracterizar el surgimiento de lo que llamamos y reconocemos como “nuevas experiencias organizativas de la AF”. Para contextualizar y ordenar este proceso nos apoyamos en la revisión de los nudos de la política pública para el sector en los últimos 20 años. En ese sentido identificamos una serie de hitos y partimos de la premisa de que los nudos identificados generaron una reconfiguración de las organizaciones representativas de la AF.

Es en esta línea, a partir de la década del 2010 y luego del conflicto con el campo advertimos el nacimiento de un conjunto de organizaciones con características distintivas. Este reconocimiento no supone un corte tajante con la tradición organizativa previa. En efecto, existen puentes que conectan ambas experiencias, pero también rupturas y particularidades.

Entre los elementos característicos de las nuevas experiencias organizativas distinguimos una serie de ejes: i) origen, ii) cambios en el repertorio de acción colectiva, iii) ruptura con la dicotomía ciudad-campo, trabajador-campesino; iv) estrategias reivindicativas de tipo sindical. El reconocimiento de estas características surge de diversos estudios de caso analizados, de los cuales retomamos dos a modo ilustrativo: La Comunitaria en Buenos Aires y La Pampa que conforma la Federación Rural y la Unión de Trabajadores de la Tierra en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

En el desarrollo de los casos planteados observamos que ambas organizaciones han tomado visibilidad al calor de un contexto político regresivo para la AF -explicitado particularmente en el *tercer nudo de la política pública*- y a partir de la territorialización de sus acciones. Entre esas acciones se destacan elementos novedosos como parte de la AF organizada, como los verdurazos y el desarrollo de formas alternativas de comercialización, la práctica teatral en el caso de La Comunitaria, o el desarrollo de colonias agroecológicas de abastecimiento urbano en el caso de la UTT. En ambas organizaciones dichas prácticas forman parte de la construcción identitaria de sus espacios organizativos y

apuntan a disputar el territorio, además de visibilizar reivindicaciones sectoriales.

De este modo, observamos que en ambos casos, aunque con distintas experiencias y trayectorias, las organizaciones desenvuelven estrategias contenciosas y no contenciosas de acuerdo a las condiciones político-institucionales que las emparentan con el movimiento piquetero: la articulación de la militancia cotidiana en sus lugares de origen y producción con prácticas de acción directa como los cortes de ruta, manifestaciones o verdurazos en las ciudades. En este aspecto, además, rompen con la dicotomía rural-urbano acercando sus problemáticas a los consumidores urbanos, a la vez que dando a conocer a los sujetos productores de alimentos. Por último, tanto La Comunitaria como la UTT extienden su alcance territorial a partir de su participación y articulación en espacios más amplios, ya sea la UTEP en el primer caso o a través de la Mesa Agroalimentaria Argentina en el caso de la UTT, reforzando su carácter político-sindical.

A modo de conclusión consideramos a este trabajo como un primer acercamiento a la caracterización de estas novedosas prácticas y estrategias que aportan estas nuevas experiencias. Quedan abiertos algunos interrogantes que no abarcamos en esta oportunidad o porque exceden los objetivos del presente trabajo o porque suponen el análisis de coyunturas futuras que los actuales eventos sugieren: ¿En qué sentido las organizaciones afectan y modifican el proceso de política pública? ¿Cómo se reconfiguran las organizaciones del sector de cara al nuevo gobierno que inicia hacia fines del 2023?

Referencias

- Acero Lagomarsino, P., y Mosca, V. A. (2023). Las estrategias de las organizaciones de la agricultura familiar en la producción del territorio: el caso del cinturón hortícola platense (2015–2019). *Revista Nera*, 26(67)
- Barsky, O. y Gelman, J (2001). *Historia del agro argentino. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX*. Buenos Aires: Grijalbo–Mondadori.
- Cittadini, R.; Caballero, L.; Moricz, M. y Mainella, F. (2010). *Economía social y agricultura familiar: hacia la construcción de nuevos paradigmas de intervención*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Fernandez, C. (2015). La potencia en la escena: Teatro Comunitario de Rivadavia: Historicidad, política, actores y sujetos en juego/s (2010–2014). [Tesis Doctorado en Ciencias Sociales]. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Plata.

García, A. (2020). Gubernamentalidad neoliberal y transformación excluyente en Argentina: el ProHuerta en el lapso 2015–2019. *Huellas* 24 (1).

Giarraca, N. (2003). La protesta agro-rural en la Argentina. En Seoane, J. (comp.), *Movimientos sociales y conflictos en América Latina*, Buenos Aires: CLACSO.

Giarraca, N. et al. (2001). *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza Editorial

Grela, P. (1997). *El grito de Alcorta*. Rosario, Tierra Nuestra

Guarnaccia, S. y De La Calle, E. (2012). Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI): Origen, herencias, historia. Agencia Paco Urondo. Disponible en: <https://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/movimiento-nacional-campesino-indigena-mnci-origen-herencias-historia>

Hocsman, L. (2015). Tierra, capital y producción agroalimentaria: despojo y resistencias en Argentina. En Almeyra, G.; Concheiro Bórquez, L.; Mendes Pereira, J.M. y Porto Gonçalves, C.W. (coords). *Capitalismo, tierra y poder en América Latina*, Ediciones Continente

Lattuada, M., Nogueira, M.E. & Urcola, M. (2015). Las formas asociativas de la agricultura familiar en el desarrollo rural argentino de las últimas décadas (1990–2014), CIRIEC-España, *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 84, 195–228.

Manzanal, M. 2021. La agricultura familiar de Argentina de las primeras décadas del siglo XXI ¿bajo la dominación, en la resistencia o sujeto de transformación? *Estudios rurales*, 11(24).

Manzanal, M. y González, F. (2010). Soberanía alimentaria y agricultura familiar. Oportunidades y desafíos del caso argentino. *Realidad económica* (255), pp. 12 – 42.

Marcos, M.F. (2021), El Monotributo Social Agropecuario como efecto de legibilidad. Un análisis desde los estudios antropológicos del estado. *Trabajo y sociedad*. XXII

Marcos, M.F. y Nosedá, C. (2020). La Agricultura Familiar y sus organizaciones en la interfase urbano rural. En Fernanda González Maraschio y Federico Villareal (comps.), *La Agricultura Familiar entre lo urbano y lo rural*, Editorial de la Universidad Nacional de Luján, Luján

Ministerio de Desarrollo Social (feb 2018). Guía de Programas Sociales. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_ds.pdf

Mosca, V. A. y González, F. (2019). La estatalidad de la AF periurbana en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires 2009–2019. *RevIISE–Revista de Ciencias Sociales y Humanas* 14 (14)..

Mosca, V. A.; Orchani, F. (2021) Cuando tenga la tierra, *La Nación Trabajadora* 1–9. Disponible en: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/157783>

Mosca, V.A. (2020). Acceso a tierra de la Agricultura Familiar en la Región Metropolitana de Buenos Aires 2009–2019. Política pública y transformaciones territoriales en un conflicto por la tierra en Abasto, La Plata (Buenos Aires, Argentina) (Tesis de Doctorado). Secretaría de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras para optar por el grado de Doctora: Área Geografía.

Navós López, N. (2021). La agricultura familiar cebollera en el Valle Bonaerense del Río Colorado: organizaciones, problemáticas y expresiones de la desigualdad. *Estudios Rurales*, 11(Esp21).

Navós López, N. (2019). La inclusión de la agricultura familiar: La visión de dos dirigentes de la confederación de trabajadores de la economía popular. En *Actas*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13604/ev.13604.pdf

Nogueira, M.E; Urcola, M y Lattuada, M. (2017). La gestión estatal del desarrollo rural y la agricultura familiar en Argentina: estilos de gestión y análisis de coyuntura 2004–2014 y 2015–2017. *Revista Latinoamericana de Estudios Rurales (ReLaER)*, 2 (4), pp. 23–59.

Oszlak, O., & O' Donnell, G. (1995) Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. *Redes*, 2(4), 99–128.

Perez, S. y Urcola, M. (2020). Movilización política y construcción de agendas reivindicativas: reflexiones sobre el proceso de organización sectorial de la agricultura familiar en el marco del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular. *Temas Y Debates*, (39), 127–143.

Saettone Pase, J. (2023). Las nuevas organizaciones de la agricultura familiar. Una aproximación desde el territorio. El caso de la organización La Comunitaria en la región pampeana argentina (2015–2021). *Revista Nera*, 26 (67)

Soverna, S., Tsakoumagkos, P. y Paz, R. (2008). Revisando la definición de Agricultura Familiar. Serie Documentos de Capacitación No 7 PROINDER/SAGPYA. Disponible en: www.proinder.gov.ar

Teubal, M; Palmisano, T y Petz, M.I. (comps.) (2019). *Pensar resistencias y protestas, Problemas y conceptualizaciones del Siglo XXI*. Buenos Aires, Antropofagia

Tobío, O. (2014). El doble carácter de la territorialidad piquetera en el norte de la Argentina: una conceptualización. *Actas del XIII Coloquio Internacional de Geocrítica*. Barcelona.

Tobío, O. (2017). El nexo entre territorialidades contenciosas y no contenciosas: experiencia y vida cotidiana en la acción colectiva de la Argentina contemporánea. En *VI Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas*. Corrientes: UNNE.

Tóffoli, M. (2021). El proceso de organización de la economía popular en Argentina: una articulación de estrategias, dinámicas de interacción y disputas discursivas (2011–2019). *Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales*, 0(15), 168–194.

Urcola, M. y Nogueira, M.E. (2023). Las agendas de las políticas públicas para la Agricultura Familiar en Argentina (2004–2023). En *VI Congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar*. La Matanza, Buenos Aires: UNLaM

Viteri, M.L., Vitale, J. y Quinteros, G. (2020). *Innovar en Tiempos de Pandemia. Agricultura Familiar en la Argentina*. Ediciones INTA